



El vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba (izquierda), junto a Alfonso Guerra, en la Comisión Constitucional del Congreso. /MANUEL H. DE LEÓN (EFE)

El Gobierno descarta exhumar a los republicanos enterrados con Franco

Un grupo de expertos decidirá sobre los restos del dictador en el Valle de los Caídos

NATALIA JUNQUERA
Madrid

“Es imposible de abordar en términos científicos”. Con estas palabras explicó ayer en el Congreso de los Diputados el vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, la decisión del Ejecutivo de no exhumar los restos de los republicanos enterrados en el Valle de los Caídos (Madrid), tal y como habían solicitado 11 familias.

Los forenses a los que el Gobierno envió al mausoleo a examinar el estado de los restos se ven incapaces de cumplir el deseo de esas familias, tal y como adelantó EL PAÍS el pasado 14 de octubre. Los huesos están mezclados y muy deteriorados por filtraciones de agua y tierra. En el Valle de los Caídos yacen 33.847 personas, 21.317 de ellas identificadas con nombre y apellidos.

El ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, ha convocado a esas 11 familias afectadas esta tarde para explicarles personalmente la decisión gubernamental. Les mostrará el informe final de los forenses, y otro estudio de tipo histórico que relata cómo se realizaron los traslados: en muchos casos, en “cajas comunes”, lo que convierte ahora en “imposible acreditar suficientemente la identidad” de los allí enterrados.

Fausto Canales, hijo y sobrino de dos republicanos fusilados por falangistas, arrojados luego a una fosa común y trasladados por último sin consentimiento de su familia al Valle de los Caídos, insiste: “Tienen que rescatarlos de ese lugar inenarrable. Cueste lo que cueste”.

Rubalcaba animó ayer a los portavoces de todos los grupos parlamentarios en la Comisión

El rastro de la tragedia

Mapa de fosas del franquismo elaborado por el Gobierno con los datos facilitados por las comunidades en las que gobiernan socialistas y por asociaciones de memoria.



Fuente: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Justicia y Sociedad de Ciencias Aranzadi.

EL PAÍS

Constitucional a consensuar “cuanto antes” qué medidas tomar en el Valle de los Caídos para que ese lugar deje de ser lo que el dictador Francisco Franco quiso que fuera: un monumento a su victoria.

El próximo 10 de mayo, el Gobierno aprobará un real decreto con el que quedará constituida una “comisión de expertos” de distintas disciplinas, en su mayoría historiadores, para decidir en primer lugar si los restos de Franco deben permanecer o no en ese recinto. Para ello habrá que abrir un proceso de gestiones con la familia del dictador.

“Los expertos deberán decidir qué hacer para que ese lugar

de culto lo sea también para las víctimas republicanas, y hasta qué punto puede ir a rezarle el familiar de un republicano teniendo a Franco ahí. A mí me gustaría que ese lugar tan tétrico se transforme en un lugar de memoria y reconciliación”, explica Ramón Jáuregui.

Rubalcaba insistió en que la Ley de Memoria Histórica es una norma “de todos”, pese a que el diputado del Partido Popular Jorge Fernández Díaz le acusara de haber “dividido profundamente a los españoles” con ella. El dirigente socialista recordó, además que, desde su aprobación, en diciembre de 2007, se han concedido más de 25 millo-

nes de euros a proyectos de reparación a las víctimas; y se ha otorgado la nacionalidad española a 187.609 descendientes de represaliados exiliados, en su mayoría residentes en Latinoamérica. Además, se han eliminado de calles y edificios públicos 570 vestigios del franquismo, aunque aún quedan algunos por el “elevado coste” que supone retirarlos.

El portavoz parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya, Joan Ridao, le afeó ayer que en Cantabria, “su tierra natal”, aún haya calles dedicadas “al generalísimo Franco”. Ridao sugirió además, que fueran expulsados del recinto los monjes benedictinos.

Las autonomías del PP niegan información del mapa de fosas

N. J., Madrid

El Gobierno publica hoy en Internet un mapa de fosas del franquismo. El rastro de la barbarie incluye más de 2.000 enterramientos comunes, de los que se han abierto 250. El PP se ha negado a facilitar datos para elaborar este documento. En las comunidades en las que gobierna han sido las asociaciones de memoria histórica las que los han proporcionado. En total han sido rescatadas 5.407 víctimas, según los datos a los que ha tenido acceso EL PAÍS. De ellas, 2.840 están en una sola fosa, en el cementerio de San Rafael (Málaga). Entre los fusilados hay al menos 152 mujeres, según la Asociación de Ciencias Aranzadi, que ha realizado la mayoría de las exhumaciones. El mal estado de los restos impidió saber el sexo de 225 víctimas.

“Ningún ser humano merece estar enterrado en una cuneta”, declaró ayer en la Comisión Constitucional del Congreso el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba. El Ejecutivo ha concluido ya el protocolo científico de actuación para la apertura de fosas, pero de momento solo ha firmado convenios de actuación con Andalucía (PSOE) y Cataluña (CiU). La semana que viene, ha convocado a representantes de todas las autonomías para que se sumen al convenio. Pero no tiene muchas esperanzas en que asistan las gobernadas por el PP.

Sin protocolos forenses

El Ejecutivo no ha asumido la apertura de fosas comunes del franquismo, que recae en las comunidades autónomas. Estas pueden así negarse a facilitar los permisos de exhumación, algo que no ha pasado hasta ahora. De hecho, se han abierto muchas en comunidades gobernadas por el PP, pero con subvenciones del Gobierno central.

A Francisco Etxebarria, el médico forense que ha participado en la mayoría de las exhumaciones, le preocupa que, al publicarse la localización de las fosas, los familiares de las víctimas intenten abrirlas por su cuenta, sin protocolos científicos, algo que ya ha pasado. El Gobierno le ha prometido intentar solventar la cuestión dialogando con las autonomías. Resta, en cambio, importancia al mapa Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica: “Lo importante no es señalar el problema, sino solucionarlo, es decir, que el Gobierno asuma la localización y exhumación de las víctimas”.

La mayoría de las fosas abiertas, a petición de los familiares de las víctimas, están en Castilla y León (127). A mucha distancia están Castilla-La Mancha (25) y Aragón (17). En Murcia, Baleares, Ceuta y Melilla no se ha exhumado ninguna.